

esfuerzos en los “modelos extractivistas”, su utilidad o inutilidad y su comparación con otros instrumentos de naturaleza similar en otras partes del mundo.

2 Interesante, podrían pensar algunos, recopilar en un texto todos los reparos ideológicos y operativos sobre la minería. En ese caso, habría sido útil anunciar desde el prólogo que se pretende reflejar sólo la opinión unilateral de un grupo de investigadores reconocidos algunos por ser opositores de la actividad. Porque un estudio académico ha debido mencionar las conclusiones de trabajos recientemente publicados por reconocidos centros de pensamiento nacionales y por firmas internacionales especializadas en minería, como aquellos de Fedesarrollo: *La minería en Colombia: impacto socioeconómico y fiscal* (2009); *El Impacto socioeconómico de la minería en Colombia* (2012); *Estudio sobre los impactos socioeconómicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales* (2013); el informe de Ernst y Young presentado con el aval académico y metodológico del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia sobre *Análisis comparativo en materia de carga fiscal para la minería en Colombia* (2012) o la investigación sobre *Emprendimiento alrededor de los sectores de la minería y el petróleo* de la Universidad de los Andes y la CAF, y cuyos autores son Guillermo Perry y Camilo Palacio (2012), entre otros.

3 Desconcierta el absoluto desconocimiento de los beneficios de la minería formal así como de su importancia como motor del crecimiento. A 2012 este sector representó 2,3% del PIB, 23% de las exportaciones, 14% de la IED, 18% de las regalías, 7% del recaudo en renta y \$5.6 billones en compras a proveedores nacionales. El sector minero energético significa 240.000 empleos directos, 4,73% de la población ocupada del país. Aunque el sector evidentemente es intensivo en capital, genera empleos para población vulnerable en zonas remotas en donde a menudo, es la única alternativa de empleo legal.

4 Un estudio especializado en minería, debe tener el cuidado de no caer en la usual confusión entre minería e

hidrocarburos y, entre la minería de bien, distinguir aquella que es formal de la artesanal, informal e ilegal. Desde muchos puntos de vista existen enormes diferencias entre los mercados y las realidades operativas de minas y petróleo; y no es correcto atribuir problemas de la pequeña minería a la minería en gran escala como tampoco se debe estigmatizar la pequeña minería como si toda fuese ilegal.

5 Responsabilizar a la minería “a gran escala o a los megaproyectos” de los efectos perversos de la informalidad y de la ilegalidad, no es un planteamiento leal para con el sector minero que le cumple al país. Buena parte de las argumentaciones expuestas, son en realidad prácticas de la extracción ilícita de minerales. Esta es una triste realidad pero de ella no se deriva que toda la actividad minera sea dañina como tampoco se puede afirmar que todos los colombianos seamos narcotraficantes ni que todos los constructores sean piratas... aunque los hay.

Las minas modernas bien manejadas existen y hacen parte del desarrollo de la humanidad.

6 Partir de la idea de que la industria minera no está comprometida con el bien común de preservar el medio ambiente, por un lado, desconoce los efectos de las concentraciones urbanas, la deforestación, la disposición de residuos en el medio ambiente y, por el otro, omite las prácticas de las empresas mineras formales: evaluación de impactos, medidas de manejo, planes de cierre de minas, tratamiento de aguas y rehabilitación de tierras entre otras.

7 No se puede responsablemente asumir como ciertos e inevitables todos los posibles impactos en cualquier mina (concentración de metales pesados, acidificación de agua, etcétera), sin tener en cuenta que hoy, aplicando la tecnología adecuada, estos riesgos pueden ser prevenidos, mitigados, compen-

sados o restaurados y, en algunos casos, sin la existencia de riesgo residual. Pero además, es importante tener en cuenta la evaluación realizada por organismos como el Banco Mundial sobre los principales problemas ambientales en Colombia.

8 Condenar la inversión extranjera porque el 99% del carbón extraído es para exportación, es no ser consciente de que Colombia es una economía de ingreso mediano y de que su capacidad de producción en la industria minera es mayor que la de consumo, así que es un país con vocación exportadora; el mundo seguirá y seguirá consumiendo minerales, la vida moderna es impensable sin ellos, prodúzcanse éstos en Colombia o no. Pero además, Colombia no sólo exporta oro, níquel, esmeraldas y carbón, también exporta el 87% del café, el 95% de las flores y más del 90% del banano que se produce. Y a nadie le indigna que estos productos -orgullosamente colombianos, que también cuentan con inversión extranjera- terminen en otros países.

9 Citar las cifras oficiales (DANE, DIAN, SGC, ANM, Banrepública, Supersociedades) de manera parcial para desprestigiar una industria, no es correcto. Por ejemplo, a riesgo de caer en complejidades técnicas, no es exacto aseverar que la participación del Estado en la riqueza que genera la actividad minera es del 16% “porque el PIB por el lado de la remuneración a factores incluye los flujos económicos relacionados con salarios, contribuciones, impuestos a la producción y consumo intermedio (este último sin considerar la remuneración al capital, variable especialmente importante para industrias intensivas en capital). Esta es una reflexión que subrepticamente utiliza un parámetro (el PIB) absolutamente inapropiado desde el punto de vista económico -dicho hasta por el Director de la DIAN, pero sobretodo, por especialistas en la renta minera en el mundo, como E&Y, quien es fuente de información confiable hasta para el FMI-. La cuenta clara y pulcra desde el punto de vista económico y financiero, debería realizarse calculando, sobre el ciclo de vida de un proyecto, la carga fiscal total (impuestos directos, indirectos, tasas, contribuciones y regalías) sobre la utilidad operativa del